

quejosos que se ha vulnerado en su persona la garantía á que se refiere el art. 14 de la Constitución Federal, por haber establecido esa Sala con posterioridad á la fecha en que el juicio comenzó; y considerando: que en el expediente aparece que no es cierto que la 2ª Sala del Tribunal de Justicia del Estado de Hidalgo, haya dictado algun auto en el juicio referido, y que por lo mismo, no se ha vulnerado la garantía citada, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto del presente juicio de amparo, el 10 de Diciembre próximo pasado, por el Juzgado de Distrito de Hidalgo, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege al C. Lic. Félix Vergara Lope, representante de los CC. Juan N. y José F. Revilla, contra el Tribunal Superior del Estado.

Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Anza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velazquez.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia que certifico. México, Febrero 12 de 1873.—*Lic. Agustín Peralta,* oficial mayor.

AMPARO de garantías promovido ante el Juzgado de Distrito de Durango, por Juan Ceniceros, contra la sentencia de muerte pronunciada en su contra, por la 2ª Sala del Tribunal Superior del Estado.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que tres sentencias se han pronunciado en el proceso formado á Juan Ceniceros: en las de 1ª y 2ª instancia, se condenó á este reo á diez años de trabajos públicos, por el homicidio de Silverio Herrera, y á dos por las heridas dadas á Leon Barron; y en la 3ª, se le condenó á la pena de muerte; por lo que ha pedido amparo, exponiendo haberse violado con aquel fallo la garantía establecida en el art. 23 de la Constitución Federal, que abolió la pena de muerte para delitos que no fuesen los exceptuados expresamente en el mismo artículo, y como contra esos casos de excepcion se comprende el de homicidio alevoso, con premeditación ó ventaja, el reo ha alegado: que ninguna de estas circunstancias está probada en la causa.

Aunque por la parte expositiva de la sentencia de 1ª instancia se deducen calificaciones, que suponen probada la alevosía, en la resolutive no se condena al reo á la pena designada al homicidio alevoso. En la 2ª instancia, expresamente se afirma que si bien las constancias procesales inducen á calificar de voluntario el homicidio, respecto de previo *concierto*, no hay pruebas suficientes. Así, pues, es sola la sentencia de 3ª instancia—por la mayoría de jueces—la que ha calificado hallarse probadas las indicadas circunstancias de alevosía, ó de ventaja; y bajo este aspecto, permitido es refutar como dudoso este punto; puesto que dos jueces han tenido como probadas aquellas calidades, y tres han creído que sobre ellas faltaban pruebas bastantes.

A juicio del Promotor es tan esencial esa prueba, sobre la alevosía, premeditación ó ventaja, cuanto que sin ella falta fundamento legal para considerar el homicidio de que se trata, con el carácter ó calidad que el art. 23 de la Constitución le exige, para comprenderse en los casos de excepción de la abolición de la pena de muerte. Y como en el art. 1º de este Código declara: que todas las leyes y todas las autoridades del país, deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución, es preciso concluir, que la Sala 3ª del Tribunal de este Estado, ha violado la garantía establecida en el art. 23; y por consiguiente, que la Justicia Federal se halla en el caso de amparar al reo Juan Ceniceros, contra la sentencia de que se trata.

Durango, Noviembre 26 de 1872.—*José María Hernández.*

Es copia. Durango, Diciembre 7 de 1872.—*José María Hernández.*

SENTENCIA del C. juez de Distrito.

Durango, Diciembre 3 de 1872.—Visto este juicio de amparo promovido por el reo puesto en capilla, Juan Ceniceros, contra la sentencia de última instancia de la 3ª Sala del Tribunal de Justicia del Estado, que lo condenó á sufrir la pena de muerte. Vistas las diligencias sobre suspensión del acto reclamado, el informe del C. juez 2º del ramo criminal como autoridad encargada de ejecutar aquella sentencia, el alegato del quejoso y el pedimento del C. Promotor Fiscal. Considerando: que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales: Que la Constitución de 1857, que es la Carta fundamental de la República, hace en su art. 1º, tít. 1º, sección 1ª, un reconocimiento formal de esos mismos derechos: Que estos ven-

drian á quedar ilusorios si la misma Constitución y demás leyes secundarias no prestaran todas las garantías que son necesarias para sostenerlos: Que uno de los derechos mas sagrados que la naturaleza ha concedido al hombre, es el don precioso de la vida: Que para garantizarlo plena y perfectamente la Constitución general de la República ha abolido la pena de muerte, dejándola solo subsistente para los casos demarcados en el art. 23 del mismo Código: Que uno de esos casos es el homicidio, cuando esto se ha cometido con alevosía, premeditación ó ventaja. Considerando: que de las constancias de autos no aparece probado con la claridad que la ley exige, que en la comisión de este delito hayan intervenido esas circunstancias: Que al contrario, es tanto mas marcada la duda que se suscita, cuanto que de los cinco jueces que han conocido de la sumaria instruida á Ceniceros, solo dos han creído ver probadas las circunstancias de que se viene haciendo mención, y los otros tres han aseverado que sobre ellas faltaban pruebas: Que es tan necesaria y tan esencial esta prueba; supuesto que sin ella falta el fundamento legal para considerar al homicidio con el carácter ó calidad que la Constitución exige, á fin de que pueda aplicarse la pena de muerte. Considerando por otra parte que las sentencias que se han pronunciado en contra del quejoso, se refieren á un delito cometido el 8 de Abril de 1863: Que siendo cierto que en el presente año tenga Ceniceros veinte y cinco de edad, resulta que en el año de 1863, en que cometió el delito, aun no cumplía diez y ocho: Que por consiguiente no se le ha podido aplicar la pena de muerte, segun así lo previene el art. 7º, de la ley general de 5 de Enero de 1857, siendo esta ley la que derivó de fundamento á la sentencia contra la que se ha promovido el presente recurso. Visto todo lo expuesto, y el deber que tienen todas las

autoridades de respetar y sostener las garantías que otorga la Constitución general de la República, el C. juez de Distrito Lic. Gerónimo Sida, dijo: Que debía declarar y declara: 1º Que la sentencia de última instancia de la 3ª Sala del Tribunal de Justicia del Estado, en contra de Juan Ceniceros, es atentatoria contra las garantías que otorga el art. 23 de la Constitución de 1857. 2º Que en consecuencia, la Justicia de la Unión ampara y protege al referido Juan Ceniceros contra dicha sentencia. 3º Remítanse estas actuaciones á la Suprema Corte de Justicia para su revision. 4º Publíquese esta sentencia en el periódico "Oficial del Estado," y sáquese la copia correspondiente para la redaccion del "Semanario Judicial."

Y por este auto definitivamente juzgando así lo proveyó y firmó el mismo C. juez, por ante mí de que certifico.—*Gerónimo Sida.*—*Juan B. Arellano*, secretario.

Es copia que certifico. Durango, Diciembre 4 de 1872.—*Juan B. Arellano*, secretario.

EFECTUATORIA de la Suprema Corte de Justicia.

México, Febrero 4 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido, por Juan Ceniceros, contra el Juzgado de Distrito de Durango, contra la sentencia pronunciada en última instancia por la 3ª Sala del Tribunal Superior del Mismo Estado, condenando á muerte al quejoso, lo alegado por éste; el informe de la autoridad; lo pedido por el Promotor Fiscal, y la sentencia pronunciada por el juez de Distrito; y Considerando: que de la pronunciada por el juez de 1ª instancia de Durango, aparace: que en la fecha de dicha sentencia, Julio de 1870, el reo tenia veinticinco años de edad,

y que por consecuencia al cometer en Abril de 1863 el delito por el cual se le ha procesado, tenia menos de diez y ocho años, circunstancia que expresamente advierte el quejoso en su alegato: que por el art. 7º de ley general de 5 de Enero de 1857, conforme á la cual se ha juzgado á Ceniceros, no se puede imponer la pena de muerte al reo menor de dicha edad: que el art. 14 de la Constitución previene, que nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas á él, de conformidad con los artículos 101 y 102 de la Constitución, se resuelve: Se confirma la sentencia del juez de Distrito de Durango, que declara: "1º Que la sentencia de última instancia de la 3ª Sala del Tribunal de Justicia del Estado, en contra de Juan Ceniceros, es atentatoria contra las garantías que otorga el art. 23 de la Constitución de 1857. 2º Que en consecuencia la Justicia de la Unión ampara y protege al referido Juan Ceniceros, contra dicha sentencia.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de donde proceden, con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Magistrados que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos y firmaron.—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Febrero 12 de 1873.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.